LA NACION
FECHA: V.25/ENERO/2002 PAG 6
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18cm

TRIBUNA

Gladys Marín Millie
Secretaria general del Partido Comunista.

La mesa de los derechos humanos

Hace poco se cumplió un año desde que se dio a conocer el resultado de la mesa de diálogo, y tanto las agrupaciones de familiares de víctimas de la represión, así como los partidos políticos y sectores vinculados a la defensa de los derechos humanos, han calificado sus resultados como "una farsa y una estafa".

Hoy, con plena convicción, podemos decir que tuvimos razón al manifestarnos contra esa mesa y del informe que de ella emanó.

En verdad, ahora queda más claro que no fue más que una gran estafa, una trampa que buscó la impunidad y salvar a Pinochet. Fue el refugio construido para tapar las criminales responsabilidades y atropellos a los derechos humanos.

La mesa de diálogo nunca entregó la verdad y menos fue un acto de justicia. Fue sólo una grosera manipulación, un acto maquiavélico. Se jugó con el dolor de los familiares de las víctimas, transformándose en un nuevo acto de tortura y crueldad por parte del Estado, que perdura en el tiempo.

Se hizo una "puesta en escena" para dar curso a un nuevo pacto entre el gobierno, los poderes fácticos y la derecha, con el objetivo de salvar a Pinochet cuando éste fue detenido en Londres.

El 13 de junio de 2000 se constituyó la instancia. El 7 de enero de 2001 se entregó el informe: las Fuerzas Armadas aceptaron entregar datos falsos a cambio de la no condena a Pinochet.

Cuando se conformó la mesa de diálogo, todos, el Parlamento, el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas, representadas principalmente por el ex almirante Arancibia (hoy senador de la UDI), los partidos de la Concertación, la derecha, estuvieron de acuerdo en aprobar una ley para que se refrendara.

Tanto victimarios, como algunos representantes de las víctimas y colaboradores, montaron el teatro de la hipocresía.

Ricardo Lagos, el Presidente de la República, expresó entonces: "Todos cometimos errores, no importa el pasado". Calificó el "conflicto político de los sesenta y setenta" como un "momento de extravío de todos". Así el Presidente Lagos pretendió igualar las responsabilidades de los golpistas y violadores de los derechos humanos con supuestas responsabilidades de las víctimas, y lo que es más grave, reducir el golpe militar propiciado desde los Estados Unidos a un momento de extravío. No tuvo ni una palabra para el gobierno constitucional de Salvador Allende.

Tuvimos razón al manifestarnos contra esa mesa y del informe que de ella emanó.

Todo se debió a que "no supimos mantener el hilo conductor", lo que dio origen a una "espiral de violencia". En la parte culminante de su discurso hizo un gran reconocimiento a las Fuerzas Armadas por su colaboración.

El entonces almirante Arancibia, con gran desparpajo, opinó: "hemos cerrado una página de nuestra historia".

Hoy, más que nunca, se requiere enfrentar esta grave situación que se prolonga en el tiempo.

Emplazamos al gobierno, a las Fuerzas Armadas, al Poder Judicial, al Parlamento, que digan lo que saben y ocultan. El país requiere saber todo: dónde los detuvieron y en qué lugares fueron encarcelados y torturados; quiénes fueron sus captores y quiénes fueron los responsables; hacia dónde los llevaron, en qué vehículos, en qué helicópteros, en qué barcos, en qué aviones. Todo eso existió y es posible conocerlo.

Con nuevas máscaras y efectos comunicacionales, no se puede tapar la verdad ante el mundo. Los organismos internacionales deben conocer lo que realmente ocurre en Chile, y ante la indefensión y la denegación de justicia, se requiere de su intervención directa y rápida.

Se equivocan profundamente quienes bajo el manto de una falsa reconciliación, buscan imponer una paz social sobre los crímenes cometidos. Lo que en verdad está en juego es el futuro del país y de sus nuevas generaciones. La experiencia mundial demuestra con creces que los pueblos no pueden alcanzar la paz, si no es con justicia y con verdad plena. El delito permanece en el tiempo, y sólo mantiene latente la posibilidad real de nuevas violaciones de los derechos humanos, que los mismos que antes los violaron pueden hacerlo de nuevo aduciendo las mismas razones que esgrimieron antes, con tanta hipocresía, odio y venganza.

Ante este cuadro, lo más importante es que se debe organizar la movilización y la lucha por verdad y justicia.

La impunidad es hoy el soporte de otras violaciones, porque legitima la práctica de abusos; da pie para políticas que van en contra de los derechos sociales, políticos y culturales de los chilenos; genera espacios para el uso indiscriminado de la represión; permite la censura e incluso la detención en contra de quienes ejercen derechos básicos en una sociedad que se dice libre y tolerante.

La mesa de diálogo, hoy, es una verdadera muralla que debemos derribar. De ella no emergió ninguna verdad, y sus integrantes guardan silencio cómplice.

Es el momento de que el pueblo hable, grite, exija. Y esa voz organizada de toda la sociedad civil es el acto democrático mínimo y básico para restituir el sacrificado camino por verdad y por justicia, que sí ha logrado romper murallas y abrir caminos que se pensaban cerrados.